

NUEVA REALIDAD AMBIENTAL COLOMBIANA

La dilapidación de los recursos naturales nacionales ha aumentado, según el vicerrector de la Universidad de los Andes, pero también exigencias internacionales y nacionales, como la Constitución, que imponen un manejo diferente del medio ambiente colombiano.

LO SOCIAL

ingrediente imprescindible

ERNESTO GUHL NANNETTI (*)

El panorama del medio ambiente colombiano es cada vez más oscuro. El deterioro de los recursos naturales es cada vez más evidente y ya existen síntomas claros que muestran cómo hemos abusado de la oferta ambiental hasta el punto de comprometer la calidad de vida de la población en vastos sectores del territorio nacional. La creciente escasez de agua, la destrucción de los bosques, la acelerada pérdida de suelos agrícolas, la contaminación de los ríos y quebradas, y la del aire de nuestras grandes ciudades son ejemplos de esta gravísima situación que afecta tanto el presente como, en forma más preocupante aún, el futuro de los colombianos.

Esta dilapidación del patrimonio ambiental es consecuencia de muy diversos y complejos factores que parten de una relación equivocada entre el hombre colombiano y su entorno, que tradicionalmente ha estado signada por la violencia y por la destrucción al considerar el territorio nacional como el escenario de la lucha del hombre contra la naturaleza. Esta actitud, que se manifiesta en todos los órdenes de la vida nacional, se encuentra presente incluso entre nuestras expresiones culturales más valoradas, como puede ser el caso de *La Vorágine*, que plantea esta confrontación hombre-natu-

raleza como el telón de fondo del tema de la novela que concluye con la derrota del hombre. Desde luego, también son causa fundamental de este deterioro el modelo económico imperante, basado en un concepto de destrucción y saqueo de los recursos naturales, y la pobreza y la falta de oportunidades que sufren vastos sectores de la población, que se ven obligados por estas mismas razones a utilizar en forma no sostenible los recursos naturales para buscar su supervivencia inmediata.

El empobrecimiento y el mal aprovechamiento de la oferta ambiental contrastan con la enorme riqueza potencial que ofrece el medio ambiente colombiano, que se expresa en una vastísima y aún poco conocida variedad ecosistémica, originada en factores de tipo geográfico, como ubicación planetaria del país en la zona ecuatorial y su cercanía a los dos mayores océanos, que determinan condiciones de temperatura, humedad, lluviosidad, insolación y demás variables de orden climático especialmente propicias para el desarrollo de la vida. Estos factores, al actuar sobre un paisaje caracterizado por áreas con un relieve muy desarrollado, en la Región Andina, y por extensas zonas que pertenecen a las grandes cuencas del Amazonas y del Orinoco, del Caribe y del Pacífico, producen

una increíble variedad de climas ambientales, que alojan una exuberante biodiversidad. Esta excepcional situación se expresa diciendo que Colombia es el segundo país del mundo en materia de biodiversidad, pues en su territorio, que equivale al 1 por ciento de la superficie emergida de la Tierra, vive aproximadamente el 10 por ciento de todas las especies animales y vegetales. La principal riqueza natural del país es precisamente la biodiversidad, pero su aprovechamiento a partir de formas propias de desarrollo sostenible es un camino que no hemos empezado a recorrer todavía.

Constitución verde

Frente a este panorama de riqueza potencial y de deterioro real, el país no ha sido indiferente. Es más, una creciente preocupación por lo ambiental se ha hecho palpable en Colombia en los últimos años y si bien es cierto que todavía no se manifiesta en el terreno de lo concreto mediante políticas y acciones que corrijan las tendencias hacia el deterioro ambiental, se avizoran señales esperanzadoras. Se han dado una serie de pasos importantes para tratar de defender el patrimonio ambiental colectivo y para tratar de aprovechar de manera inteligente y responsable nuestros

recursos naturales. Estas acciones han sido impulsadas en buena medida por la creciente preocupación internacional por el estado del planeta, que se expresó en los acuerdos (y en los desacuerdos) logrados en la Conferencia de Río. La ola global de preocupación ambientalista influyó, pues, notablemente, en las realizaciones que se han logrado en el país en este campo. Hacia el futuro, el cumplimiento de los acuerdos internacionales relativos al medio ambiente, como las convenciones de biodiversidad y de cambio climático y el protocolo de Montreal, incidirán marcadamente en la política ambiental colombiana.

La Constitución de 1991 es una Constitución Verde. Ella hace un especial énfasis en las relaciones entre el hombre y la naturaleza, consagrando una serie de derechos, de responsabilidades y de posibilidades, para lograr disfrutar de un medio ambiente sano en Colombia. Varios artículos del capítulo de la Carta están dedicados a estos temas, que también tratan en muchas otras partes de la misma, lo que refleja la importancia que le confiere a la relación hombre-naturaleza como base de calidad de vida, de la justicia y del bienestar colectivo e individual. El derecho colectivo a un ambiente sano, consagra en la Constitución

"También es causa fundamental de este deterioro el modelo económico imperante, basado en un concepto de destrucción y saqueo de los recursos naturales"



1991 como un valor esencial para la convivencia armónica y el ejercicio de la democracia participativa, en lo ambiental, por su mismo carácter, adquiere una relevancia especial. El camino hacia el Desarrollo sostenible como vía hacia el desarrollo social implica necesariamente el concurso y el esfuerzo de todos los sectores sociales. El Gobierno y la sociedad civil deben contribuir a este propósito colectivo, poniendo en práctica las normas de participación ciudadana en la planeación, gestión y control ambientales, previstas en la Constitución y en la ley.

También el país buscó la modificación del estrecho y obsoleto marco institucional que se ocupaba de la problemática ambiental y la actitud de control policivo que había estado primando por parte de las autoridades ambientales, creando el Sistema Nacional Ambiental, mediante la Ley 99 de 1993. El Sistema, encabezado por el Ministerio del Medio Ambiente, que es el responsable de la definición de la política ambiental nacional y de la planeación ambiental en Colombia. Para realizar su labor, el Ministerio se apoya en cinco institutos de investigación que permiten dar los aportes científicos y tecnológicos necesarios para la toma de decisiones y la formulación de políticas. La ejecución de las

políticas ambientales se ha descentralizado y alojado en 34 corporaciones regionales que cubren el territorio nacional, y en cuya dirección las ONG, el sector privado y las entidades territoriales desempeñan un papel fundamental.

Las ciudades con población superior a 1 millón de habitantes serán responsables de establecer su propio marco para la gestión y la planeación ambientales. Para poder lograr los objetivos establecidos en la ley, todo este ambicioso marco institucional que hasta ahora se ha definido en términos legales deberá ponerse en funcionamiento de manera que tenga un carácter sistémico, integrado y armónico, lo cual se constituye en uno de los grandes retos del futuro inmediato. Es más, la naturaleza interdisciplinaria y la amplitud de los temas ambientales hacen que las funciones del Ministerio posean un carácter transectorial que implica la introducción de la variable ambiental en las políticas y acciones de otros ministerios y entidades, como los de agricultura, desarrollo, minas y energía y relaciones exteriores, para citar algunos. Por lo tanto, la labor del Ministerio, para tener éxito, debe ser fundamentalmente de coordinación, de concertación y de armonización de políticas con el resto del aparato estatal.

Exigencias

La internacionalización del país y la apertura de su economía constituyen otro frente en el que la componente ambiental tiene unas grandes repercusiones. Las exigencias y regulaciones del comercio internacional para el cumplimiento de estándares ambientales han venido constituyendo en forma creciente una especie de barrera arancelaria que obliga a que si se quiere participar en los mercados mundiales en forma competitiva y eficiente es indispensable adoptar procesos de producción, de comercialización y de control de calidad que satisfagan las normas ambientales. Todo este trabajo de establecimiento de normas y regulaciones en lo que respecta a la explotación de recursos naturales y a su procesamiento industrial, debe también llevarse a la realidad a corto plazo. De otro lado, los nuevos proyectos de aprovechamiento de recursos naturales no renovables, en particular el petróleo, el gas y el carbón, que se convertirán en la mayor componente del comercio exterior colombiano, implican la construcción de importantes proyectos de infraestructura, como oleoductos, gasoductos, carreteras y ferrocarriles, cuyas licencias ambientales debe otorgar el Ministerio del Me-

dio Ambiente y que deben planearse, construirse y operarse cumpliendo con los requisitos ambientales, como estudios de impacto ambiental, planes de manejo y de contingencia y la utilización de tecnologías ambientales sanas.

De lo dicho queda claro que en este momento, en Colombia se está viviendo una situación realmente excepcional en lo que respecta al medio ambiente. Todo es nuevo: una actitud más respetuosa y realista hacia lo ambiental y la preocupación por el estado del medio ambiente; la importancia que le confieren la Constitución y la ley y el papel de la comunidad en la gestión y el control ambientales; la internacionalización de la economía nacional, que implica programas de reconversión del sector productivo para buscar mayor eficiencia y competitividad utilizando tecnologías ambientalmente sanas; la competencia en los mercados mundiales en los que las normas y estándares ambientales desempeñan un papel cada vez más importante, y, desde luego, el recién creado marco institucional conformado por el SINA.

Escenario nuevo

Todo este nuevo escenario ofrece una enorme cantidad de posibilidades y de oportunidades y simultáneamente presenta una gran cantidad de dificultades y de problemas para poder aprovechar las oportunidades que abre. La primera gran dificultad es la ignorancia, el desconocimiento de nuestra realidad biogeográfica y de las riquezas de la biodiversidad. Colombia aún, en los albores del siglo XXI, sigue siendo una incógnita. Será necesario desarrollar programas de investigación que nos permitan conocer nuestra realidad para poder aprovecharla. La política de ciencia y tecnología debe dar prioridad a la investigación de nuestro patrimonio natural y a la conversión de la biodiversidad en productos tropicales que tengan valor en el mercado. Pero la ignorancia y el desconocimiento no se si-

tuán exclusivamente en el campo científico tecnológico. La indispensable modificación de la pésima relación que ha existido en Colombia entre el Hombre y la Naturaleza implica cambios culturales profundos que deben darse por medio de procesos educativos con una amplia participación de las ONG, que deben abarcar desde los más elementales conceptos aprendidos en el hogar y en la escuela para una convivencia armónica con el entorno, hasta la formación de científicos e investigadores que hagan posible iniciar el camino hacia el desarrollo sostenible. Debemos aprender a entender y a amar la naturaleza para poder aprovecharla racionalmente.

La internacionalización de la economía y la utilización de los recursos naturales obligan, como se ha dicho, a desarrollar un ambicioso programa de construcción y de modernización de la infraestructura nacional que deberá hacerse cumpliendo con las normas y requisitos ambientales para que estas obras no contribuyan a la destrucción del medio, como ha venido ocurriendo frecuentemente hasta el presente. También, los programas de reconversión industrial y del agro implican la importación de tecnologías ambientalmente sanas, que debemos incorporar al país mediante procesos de transferencia de tecnologías que vayan más allá de una simple transferencia de capitales, y que debemos aprender a hacer desde la selección, adaptación y apropiación de las diversas alternativas tecnológicas, hasta la negociación en las mejores condiciones para el país.

Pero es fundamental comprender que todo este proceso se desenvuelve en un contexto social. En buena medida, las causas de la profunda crisis ambiental que sufre el país deben encontrarse en el campo de lo social. La pobreza, la injusticia y la inequidad en la distribución del ingreso y de las oportunidades son factores dinamizantes de los procesos de deterioro ambiental y, por lo tanto, la política ambiental debe estar estrechamente ligada con las políticas sociales y económicas. La inversión social y la generación de empleo en busca de una sociedad más igualitaria serán las más valiosas herramientas para encontrar formas propias de desarrollo sostenible.

* Vicerrector de la Universidad de Los Andes.